

MODERNIZACION DEL ESTADO Y PRIVATIZACION

Lic. Santiago Ruiz¹

1. LA ESTRATEGIA DE LOS GRANDES EMPRESARIOS

En los años 1980 a 1983, existían tres conflictos fundamentales: la guerra civil entre el gobierno y el FMLN-FDR, la guerra sucia entre los escuadrones de la muerte y la oposición democrática, así como el enfrentamiento entre el gobierno demócrata cristiano y los sectores económicamente poderosos de la derecha. En el fondo había tres estrategias tratando de lograr hegemonía política, social y económica: la revolucionaria, la reformista contrainsurgente y la de mantener el sistema de dominación preexistente.

Durante el año 1984, los grandes empresarios diseñaron una estrategia de modernización del sistema de dominación capitalista que existía en el país. Este proceso de redefinición de la estrategia económico-política de la derecha fue muy difícil, pero la consigna de "modernización capitalista o pérdida del capital invertido en El Salvador" fue aceptada por la mayoría de los empresarios que se habían quedado viviendo en el país o que se habían refugiado en otros países.

En resumen, la estrategia de los grandes empresarios planteaba los siguientes objetivos:

- lograr consolidar una alianza entre las "grandes familias" (redes empresariales familiares) y empresarios individuales grandes y medianos para la supervivencia del sistema económico y social capitalista;
- fortalecer el Partido ARENA para disputar el poder gubernamental al Partido Demócrata Cristiano.

- neutralizar las acciones del gobierno demócrata cristiano emprendidas contra los sectores de la gran empresa y terratenientes (reforma agraria, nacionalización bancaria, nacionalización del comercio exterior, limitaciones en el uso del crédito y de las divisas);
- fortalecer la relación con los sectores conservadores de los EEUU (republicanos), Europa y Asia;
- presionar al gobierno demócrata cristiano y gestionar ante el gobierno de los EEUU, para realizar una guerra total y derrotar militarmente al FMLN;
- aprovechar las relaciones sociales existentes para fortalecer un nuevo liderazgo social de los empresarios y políticos de derecha, a nivel local y regional;
- reactivar y modernizar la empresa privada, así como fortalecer al sector empresarial mediante la privatización de activos del Estado y canalización de recursos financieros internacionales;
- desplazar al gobierno de Duarte para eliminar los obstáculos estatales para la modernización del sistema capitalista salvadoreño.

2. LA PUESTA EN PRACTICA DE LA ESTRATEGIA

La aplicación de esa estrategia fue una de las luchas más grandes realizadas por los empresarios y la dirección del Partido ARENA, con el apoyo teórico, técnico y financiero de FUSADES a partir del año 1986. La desactivación de los escuadrones de la muerte se inscribe en el marco de aplicación de esta estrategia modernizante de la derecha.

¹ Director del Instituto de Investigaciones Económicas (INVE) y Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas.

A principios del año 1988, los grandes empresarios habían obtenido tres de los objetivos estratégicos: a) el gobierno del Presidente Duarte había quedado aislado; b) una parte significativa de la sociedad civil salvadoreña era conducida por el sector de la gran empresa, una generación más joven de empresarios había asumido la conducción de la aplicación de la estrategia empresarial y había regresado la mayor parte de los empresarios salvadoreños que estaban refugiados en EEUU y otros países; c) el Partido ARENA había ganado la confianza de la mayoría de la población. En estas condiciones, en la campaña electoral de 1988, el Partido ARENA levantó las banderas de la lucha contra la corrupción demócrata cristiana, la derrota del FMLN y lograr la estabilidad y reactivación económica. En el mes de Julio de 1989, el Partido ARENA asumió el gobierno con el Lic. Alfredo Cristiani como Presidente, el cual era miembro de una de las "grandes familias" o redes familiares empresariales.

La ofensiva del FMLN a fines del año 1989, obligó a la plana mayor del sector empresarial y del Partido ARENA a modificar la estrategia en relación al FMLN, no se le podía vencer, pero era posible negociar aquellas reivindicaciones democráticas propuestas por el FMLN y que el nuevo sistema de dominación pudiera soportar.

En el campo económico, la primera prioridad del Gobierno de Cristiani fue implementar una política de ajuste estructural que no creara grandes tensiones a nivel popular y entre los sectores empresariales; la política de estabilización hizo disminuir la inflación y creó condiciones para la reactivación económica. También el gobierno puso mucho esmero en legitimar e iniciar el proceso de privatización de instituciones públicas, el comercio de divisas que era atribución de los bancos nacionalizados pasó a ser realizado por las casas de cambio y se inició la privatización del IRA, ISIC y ENA. Por su parte, el sector empresarial se dedicó a la reactivación económica de sus empresas y a reinsertar sus capitales en el nuevo sector financiero (casas de cambio), el comercio y los servicios.

3. LA PRIVATIZACION SE ACELERO

La negociación de los Acuerdos de Paz fue muy compleja, los sectores de derecha mantuvieron una fuerte resistencia a aceptar que hubieran acciones profundas para la democratización y desmilitarización del país. Una vez que se firmaron los Acuerdos de

Chapultepec, la plana mayor empresarial y del Partido Arena, renovada con nuevos elementos empresariales y políticos, definió que el esfuerzo principal del gobierno se orientara a conseguir los siguientes objetivos:

- lograr la desmovilización real del FMLN;
- avanzar en el proceso de democratización formal, evitando que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz pudiera afectar al nuevo sistema de dominación económico-social, que se había reconstruido durante la década de los ochenta;
- aprovechar el proceso de reconstrucción económica de post-guerra para legitimar al gobierno de ARENA y potenciar a la empresa privada;
- lograr mantener en el gobierno al Partido Arena;
- impulsar el proceso de privatización para favorecer a grandes redes empresariales, dando participación a los trabajadores, pequeños y medianos empresarios;
- lograr la canalización de recursos del sistema financiero internacional hacia el sector privado;
- incrementar la tasa de inversiones del sector privado.

El gobierno procedió a privatizar los bancos comerciales, las instituciones financieras de ahorro y crédito, ITCA, INCAFE, INAZUCAR y Hotel Presidente. Ha realizado acciones para iniciar el proceso de privatización en ANTEL, CEL, ANDA e ISSS.

La gran empresa realizó el reparto del sistema bancario y de las asociaciones de ahorro y crédito, entre algunas de las "grandes familias" o redes empresariales familiares, sin generar tensiones peligrosas para el nuevo sistema de dominación. Las entidades financieras que habían sido nacionalizadas en una situación de quiebra, fueron entregadas a los grandes empresarios completamente sanas, sin deudas. Los sectores más tradicionales de la derecha económica y política del país, que dependen fundamentalmente de las actividades agrícolas, habían participado a regañadientes en el acuerdo de la derecha para enfrentar la emergencia de la guerra, pero la forma en que algunas de las grandes familias se repartieron el sistema bancario y crediticio, hizo surgir fuertes tensiones en este sector de la derecha

más tradicional, se molestaron por la voracidad con que los sectores empresariales "modernos" estaban participando en el proceso de privatización del sector público. El principal vocero de esos sectores tradicionales ha sido el Diario de Hoy, quien desde hace varios meses ha venido identificando al sector empresarial moderno como la "argolla dorada", refiriéndose posiblemente a las familias: Baldochi, Borgonovo, Cristiani, Daglio, De Sola, Dueñas, González, Guirola, Giner, Hill, Llach Hill, Mathies Regalado, Meza, Meza Hill, Regalado Dueñas, Simán. En la actualidad, el Dr. Kirio Waldo Salgado, está llevando a cabo una campaña de denuncias contra un grupo de grandes empresarios que están siendo favorecidos por el gobierno de ARENA, afectando los intereses de otros empresarios miembros de ese mismo partido.

4. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL HA TENIDO EXITO

Al observar la situación a mediados del año 1994, es sorprendente el éxito logrado por los sectores de la gran empresa modernizante: ha reestructurado el sistema de dominación sobre una base económica, social y política más sólida; manejan la mayor parte de la sociedad civil; tienen en sus manos el gobierno de la nación; hay una reactivación económica; y lo más interesante es que la mayoría de la población está de acuerdo con esta situación. La oposición social (organizaciones populares de la sociedad civil) es relativamente débil, sin una estrategia unificada de acción y sin motivación para realizar una lucha sostenida para modificar el sistema de dominación. La oposición política se encuentra dividida, con varias estrategias de acción y en un proceso de desligamiento de la población y de encierro en los recintos legislativos.

Posiblemente el gobierno del Presidente Calderón Sol continuará llevando a cabo el proceso de privatización de toda aquella actividad realizada actualmente por instituciones públicas, que le permita al sector empresarial obtener una ganancia; el ejemplo más claro es la privatización de operaciones de ANTEL (televisión por cable, telefonía móvil celular, transmisión de datos, servicios internacionales, etc.). Es previsible que el gobierno se quede con aquellas actividades públicas que no pueden generar ganancia y asumirá las deudas nacionales e internacionales de las entidades públicas a privatizar.

Es casi seguro que establecerán un mecanismo para que el Estado compre las carteras de deudores morosos

de esas instituciones, siendo en su mayoría empresarios privados que han utilizado sus influencias para aprovechar los servicios públicos y no pagar por ellos, es el caso del ISSS. Según la política gubernamental se fijará un precio relativamente bajo por los activos a privatizar, se dará facilidades crediticias a los empresarios para adquirir los activos y se limitará a establecer mecanismos formales, pero poco efectivos, para evitar que las Juntas Directivas de las nuevas instituciones privatizadas queden en manos de las familias más poderosas del país.

5. UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Los sectores populares deben de tener una posición clara con respecto al papel del Estado y el proceso de privatización, de tal manera de evitar que la derecha modernizante continúe conduciendo ese proceso para su provecho particular y cargando sobre la población los costos del mismo. A continuación se exponen algunas ideas básicas sobre la posición que deberían adoptar los sectores populares, es decir los trabajadores y los usuarios de los servicios públicos que se pretenden privatizar.

5.1. Defender la función social del Estado

Todos los ciudadanos tienen la obligación de defender la función social del Estado, es un logro del desarrollo social, es un producto histórico positivo, es un derecho constitucional. Los ciudadanos pagan impuestos, especialmente los pobres y menos pobres, para que el gobierno provea servicios públicos que benefician a los que tienen más necesidad.

Ahora bien, no todo lo que hacen las instituciones públicas es de su competencia permanente, muchas veces esas instituciones han tenido que intervenir empresas privadas que no prestan servicios públicos y por pura inercia han quedado formando parte del patrimonio público (empresas pesqueras e industriales); en otros casos, se ha considerado que un determinado servicio es público, por su importancia cultural o científica, como por ejemplo los locales para presentar obras teatrales, pero no necesariamente es un servicio público el cine de baja calidad que promueve la prostitución y el crimen.

La función social del gobierno, en su verdadero sentido de la palabra, se ha comenzado a rescatar en

varios países, después de un período muy difícil en que se pretendió privatizar la mayoría de funciones sociales del gobierno.

5.2. Desburocratizar las instituciones públicas

Las actividades que desarrollan todos los sectores de la economía deben hacer un uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; el sector público no puede ser una excepción, más bien está obligado a dar el ejemplo de eficiencia y de proporcionar la máxima utilidad para la población. Los servicios públicos deben ser oportunos, aumentar en cantidad y ser más efectivos para resolver los problemas sociales de la población salvadoreña.

Es imprescindible mejorar la cantidad y calidad del trabajo realizado por los empleados públicos. La mayoría de empleados públicos creen que están aportando a la sociedad un trabajo equivalente al salario devengado, e incluso que están aportando más de lo que se les paga, cuestión que no es cierta para la mayoría de casos; por otro lado, hay algunos verdaderos servidores públicos, dedicados, abnegados, atentos, comprensivos y de buenas maneras, que no son adecuadamente compensados.

5.3. Luchar contra la Corrupción

La enfermedad principal de las instituciones públicas es la corrupción; el que tiene cómo pagar logra beneficiarse de las actividades gubernamentales. La corrupción enriquece a los jefes más altos, pero contamina a empleados de niveles más bajos, los cuales reciben generalmente una pequeña parte del botín y el derecho a trabajar como les parezca, sin esfuerzo, sin esmero, sin espíritu de servicio. Los trabajadores públicos

deben ser los más interesados por mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones públicas y deben ser los primeros en la lucha contra la corrupción.

5.4. Establecer Empresas de Trabajadores

Los trabajadores, organizados en cooperativas o sociedades de capital, tienen la posibilidad de participar realmente en la administración o de invertir en varias actividades que el Estado ha venido realizando en los últimos años, pero que no corresponden a la función social del Estado. Esta tarea no puede asumirse exclusivamente desde el punto de vista gremial, sino que mediante una organización para la producción, en la que trabajadores y pequeños empresarios, dedicados al trabajo, conscientes de la función productiva de la actividad y dispuestos a realizar el esfuerzo que sea necesario, asuman el control de la propiedad y la administración de esas actividades. Para que los sectores populares puedan participar realmente en la administración de las actividades privatizadas, es necesario que el proceso de privatización sea más largo, de tal manera de permitir la organización productiva de estos sectores.

La privatización de actividades que no corresponden a la función pública del Estado, debe realizarse de tal manera que beneficie a muchas familias que en la actualidad no tienen la oportunidad de entrar a invertir en una actividad productiva. No se debe continuar el proceso de entregar los activos de las instituciones públicas a las "grandes familias". Las licitaciones y las subastas son mecanismos que facilitan la concentración de la propiedad. El gobierno y las organizaciones de la sociedad civil deben de realizar acciones para evitar la concentración del poder económico, en las nuevas empresas surgidas del proceso de privatización. □